

Ponencia SOMEE

El financiamiento público como una vía para promover la representación política de las mujeres en México, Colombia y Brasil

Erika Estrada Ruiz

I. Introducción

La entrega de incentivos económicos a los partidos políticos se ha convertido en una práctica, distinta a las leyes de cuotas o a la paridad de género, para incentivar la incorporación de las mujeres en las candidaturas y fomentar su participación en los cargos de representación popular. Esta medida, que es innovadora para las democracias latinoamericanas, está centrada en entregar recursos públicos para el empoderamiento de las mujeres o, en su caso, en la imposición de una sanción por parte de la autoridad electoral a los partidos que no cumplan con la exigencia de que haya mujeres en las candidaturas.

Estas herramientas son ejemplos de cómo algunos países en América Latina han buscado nuevas opciones como medios para fomentar la participación de las mujeres en la política, encaminados a proporcionar recursos económicos para combatir las limitaciones que encuentran las mujeres al interior de los partidos políticos así como también cuando quieren desarrollar una campaña electoral. La creencia respecto a la limitada capacidad de las mujeres para desempeñarse en los cargos de elección popular, la ausencia de experiencia política, la presencia de fuertes estereotipos de género y arraigadas tradiciones, así como prácticas que relegan a las mujeres son algunos de los obstáculos que se han presentado cuando las mujeres han decidido participar en los partidos políticos.¹

En diversos países de América Latina como Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití, México y Panamá se contemplan normas que obligan que se destine una parte del financiamiento público recibido por los partidos al fortalecimiento de las capacidades de las mujeres.

El objetivo de este trabajo es comparar las legislaciones de tres de estos países Brasil, Colombia y México para conocer de qué manera se ha abordado, desde el punto de vista normativo, la exigencia de que las mujeres ocupen más candidaturas y puestos de elección a través de incentivos económicos. El argumento es que a través del uso de recursos se superan los techos de billetes a los que se enfrentan las mujeres cuando compiten dentro de los partidos políticos por una candidatura y se logra combatir limitaciones basadas en creencias, estereotipos y arraigos.

El capítulo aborda las disposiciones en tres países de la región, Colombia, Brasil y México, que cuentan con legislaciones que abordan de manera más profunda el tema del

¹ Sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres en la vida política en América Latina ver Muñoz Pogossian (2016) y Freidenberg (2016).

financiamiento con la intención de contribuir a que las mujeres logren posicionarse con mayores posibilidades en la búsqueda de un espacio o candidatura de elección popular. El texto profundiza en un caso en particular, México, para enfatizar cuáles han sido los resultados que en la práctica se han obtenido después de varios años de aprobada la medida, de una estrategia en particular como es la de exigir que se destine un determinado porcentaje del financiamiento público a la capacitación y fortalecimiento del liderazgo femenino. Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones para que el uso de los recursos públicos logre tener un mayor impacto sobre la participación y la representación de las mujeres en las instituciones.

II. Las medidas de igualdad y el financiamiento público de apoyo a la representación de las mujeres

La equidad descansa sobre un concepto de justicia que comprende que hombres y mujeres tienen una igualdad de consideración como seres humanos (Dworkin 1993). Esto pone en evidencia que visto desde el punto del ejercicio de derechos fundamentales, contar con un piso equilibrado que brinde igualdad de circunstancias en su ejercicio. Ese reconocimiento de derechos fundamentales y su ejercicio en un plano de igualdad ha sido un tema de la agenda pública desde hace varias décadas. El papel de la mujer dentro de la sociedad y su inclusión en las instituciones públicas, al menos desde la representación descriptiva, ha trascendido del reconocimiento de sus derechos a un ejercicio efectivo que cada vez contribuye más a acortar la brecha existente entre mujeres y hombres.²

Una vez reconocidos los derechos sustantivos de la mujer, el centro de atención se ha orientado a cuestiones más instrumentales (Ferreira Rubio 2009: 2), ideándose nuevos mecanismos para fortalecer la presencia de las mujeres pues este reconocimiento formal de los derechos políticos no alcanzó para producir la incorporación de la mujer a la política en condiciones de igualdad (Ferreira Rubio 2013:78). Estos nuevos mecanismos tienen que ver con la creación de Comisiones especializadas para la atención de temas de género en los Congresos, la formación de áreas responsables del tema de igualdad en las estructuras de los órganos electorales (como las Unidades de Género o los Observatorios políticos de la participación de las mujeres), los incentivos para los partidos políticos que postulen mujeres a los cargos de elección popular y las sanciones para los partidos que no destinan recursos económicos legalmente establecidos a la capacitación y fortalecimiento de los liderazgos.

El hecho de que el Estado otorgue recursos públicos y/o permita el acceso a recursos privados a los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades es un tema recurrente en los debates sobre democracia y su calidad (Ferreira Rubio 2013; Zovatto y Casas-Zamora 2015). La discusión se ha abordado desde diversas vertientes con la intención de conocer y reconocer en qué medida el hecho de proveer recursos a los partidos políticos contribuye o no a mejorar las prácticas internas de los partidos y si con ello se mejora el papel de las mujeres dentro de unos partidos que históricamente las han relegado.

² El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley.

De acuerdo a la base de datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en los países de América Latina se ha privilegiado la entrega de financiamiento público a los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias así como también de sus actividades de campaña. El argumento principal que sostiene esta tendencia es que el otorgamiento de recursos públicos protege de la incursión de intereses privados, que pueden distorsionar o alterar los intereses de los partidos, favorece la fiscalización de los recursos, contribuye a la transparencia en las finanzas y proporciona equidad en la contienda electoral (Córdova y Murayama 2006:19).

De modo similar, al hablar del costo de la democracia, se ha señalado que el financiamiento político es parte de la normalidad y la salud de la vida democrática. En efecto, el dotar de dinero a los partidos políticos como mecanismo aminora la utilización de financiamiento de origen ilícito, reduce la brecha de inequidad entre los participantes y la influencia que intereses privados puede generarse en la política (Zovatto y Casas-Zamora 2015: 2).

El financiamiento es entregado a los partidos políticos para cubrir distintas necesidades que van desde el mantenimiento ordinario de las estructuras partidistas, actividades para la promoción y la movilización de los votantes y, en algunos casos, actividades específicas para el desarrollo de la cultura democrática y del fortalecimiento de la militancia. De 18 países de la región, 15 otorgan a los partidos políticos financiamiento público de manera permanente y cuatro únicamente lo hacen para las actividades relacionadas con los procesos electorales.

Las decisiones de cómo se utiliza este financiamiento en cada partido político han pertenecido al grupo o grupos de poder que se forman en los mismos. Esas organizaciones han sido históricamente integradas y dirigidas por hombres (Llanos y Rozas 2012). Esto ha limitado el desarrollo y participación de las mujeres en los partidos políticos y el ejercicio de los derechos políticos sustantivos, pues estas decisiones obedecen a una lógica de vida intrapartidaria y de autonomía en la toma de decisiones en la que, hasta ahora, se ha privilegiado que sean los propios partidos los que decidan a dónde canalizar sus esfuerzos y recursos así como también la definición de sus estrategias de campaña.

Ahora bien, a pesar los obstáculos que las mujeres han enfrentado históricamente en América Latina, en las últimas décadas se ha dado un avance importante respecto a su participación política y, fundamentalmente, en la representación descriptiva. Algunos de los factores que han contribuido a ello ha sido la introducción de leyes de cuotas de género y el principio de paridad en la definición de las candidaturas (Caminotti 2016; Krook y Norris 2014). Este cambio normativo ha permitido que un mayor número de mujeres contiendan por un cargo de elección popular y, eventualmente, tengan más oportunidades para conseguir un escaño a nivel legislativo.

De los países estudiados en esta investigación, sólo Brasil contaba con una Jefa de Estado y la representación política de las mujeres en el poder legislativo a nivel nacional varía desde un porcentaje de 30% para la Cámara Baja y un 45% para la Cámara Alta de acuerdo a la base de datos de IDEA Internacional, siendo que en estos países la representación de las mujeres en el Congreso es considerablemente más alta en México de lo que sucede en

Brasil o Colombia. En ambos países existe un pronunciamiento a favor de la equidad de género en el Acto Legislativo 1 de 2009 en Brasil y en la Ley 1475 de 2011 en Colombia. En tanto, en México, se reconoció el principio de paridad en el artículo 41 del texto constitucional en la última reforma político electoral aprobada en 2014.

Los tres países cuentan con normas que incentivan la participación política de las mujeres en la postulación a un cargo de elección popular. Colombia en la Ley 581 de 2000 “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público”, de manera adicional, incluye a los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama ejecutiva, el personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público con atribuciones de dirección y mando.

Mientras Colombia y Brasil cuentan con cuota de género que posiciona a un 30% como máximo de un mismo sexo, en México la reforma electoral en 2014 modificó el artículo 41 constitucional introduciendo la paridad en candidaturas a legisladores federales y locales.

Tabla No. 1

REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO U ÓRGANO EQUIVALENTE		EQUIDAD O PARIDAD NORMATIVA	
	Cámara de Diputado s	Cámara de Senadores	Texto de la Legislación
Brasil	10%	13.5%	Acto Legislativo 1 de 2009 “Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos”. Ley 12.034 29 de septiembre de 2009. Artículo 10. El número de vacantes resultantes de las normas establecidas en el presente artículo, cada partido o coalición completarán un mínimo del 30 % y un máximo de 70 % para los candidatos de cada sexo.
Colombia	En la última elección fueron electas 68 diputadas en 25 departamentos, esto es el 16,3% del total de los electos para estas corporaciones públicas. Desde 2006, el número de mujeres que han conseguido un escaño en el legislativo ha ido en aumento: en el Senado, la proporción de mujeres pasó de 12% en 2006 a 21% en 2014 – después de la primera implementación de la cuota del 30% en una elección nacional; asimismo, en la Cámara de Representantes esta tasa subió de 10% a 18% entre 2006 y 2014 (Battle: 8)		Constitución Política de Colombia. Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Ley 581 de 2000 Artículo 1°. Finalidad. La presente ley crea los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del Artículo 2°. Concepto de máximo nivel decisorio. Para los efectos de esta ley, entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Artículo 3°. Concepto de otros niveles decisorios. Entiéndase para los efectos de esta ley, por "otros niveles decisorios" los que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial. Artículo 4°. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2° y 3° de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:

			<p>a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2°, serán desempeñados por mujeres;</p> <p>b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3°, serán desempeñados por mujeres.</p>
México	42.4% de las 500 curules son ocupadas por mujeres	36.7% de las 128 curules son ocupadas por mujeres.	<p>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</p> <p>Artículo 41. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales</p>

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa legal y la Base de datos de IDEA Internacional

Si bien los países de la región han construido sistemas específicos para proveer recursos a los partidos políticos y fiscalizarlos a través de distintas reformas legales y ajustes provocados por sentencias de órganos jurisdiccionales, la característica común entre los tres países estudiados (Brasil, Colombia y México) es que han optado por destinar recursos públicos de manera preponderante al financiamiento privado. El cálculo, diferente en cada país, obedece a una base legal sobre la cual se determina cómo, cuándo y qué montos serán otorgados por cada Estado para que los partidos políticos desarrollen sus actividades de vida cotidiana o en la contienda electoral.

En las últimas décadas se ha consolidado el reconocimiento al ejercicio de derechos políticos electorales en los países de América Latina como lo son el derecho de votar y poder ser electas a cualquier cargo; en la actualidad las discusiones son aún más complejas y tienen que ver con cómo hacer efectivo el derecho a ser votadas en condiciones de igualdad con los hombres. El reconocimiento a las mujeres como titulares de derechos se encuentra ahora en la necesidad de que efectivamente se eliminen barreras estructurales que van desde la falta de oportunidades en la recolección de fondos, la limitación de apoyo al interior de los partidos políticos para lograr una candidatura, los estereotipos de género arraigados, las barreras personales, entre otros.

La barrera de “aspirante a candidata” se ha venido superando con la introducción de medidas de acción afirmativa temporales y, en el siguiente paso, de “candidata a electa”, juegan un papel fundamental los partidos políticos y las medidas que se implementen para fortalecer que se logre la meta (Muñoz Pogossian 2016: 8). El reconocimiento de techos de cristal, billetes, cemento y los estereotipos de género presentes, tanto en la vida cotidiana como en la política, son los que necesariamente tienen que ser abatidos para el empoderamiento efectivo de las mujeres.³ La principal labor se ha realizado hacia fuera de

³ Una explicación sobre qué son los techos de cristal, cemento y billetes se puede encontrar en Muñoz-Pogossian, Betilde, Flavia Freidenberg, Mariana Caminotti y Tomas Dosek. 2016 (forthcoming). "Women,

los partidos políticos, pero la falta o limitada visión interna es un desincentivo para que las mujeres dentro de éstos puedan competir en condiciones de igualdad con los candidatos hombres.

Brasil, Colombia y México disponen de normas que abordan uno de los problemas más acuciantes de los que se enfrentan las mujeres al querer participar en la política: los “techos de billetes” (Pomares 2014). Esta es una de las dimensiones donde se encuentra una de los principales cuello de botella para la inclusión de las mujeres en las listas (Freidenberg y Estrada 2013: 15). Los partidos ofrecen poco o nulo financiamiento a las mujeres para el desarrollo de sus campañas. Estos “techos de billetes” condicionan los alcances que cualquier candidato, sea hombre o mujer, puede dar a su campaña. Esto no significa que el éxito esté condicionado al uso de más recursos, pero si es un factor a tomar en cuenta para alcanzarlo, pues posibilita el diseño de estrategias con mayores alcances, diversificación en el uso de herramientas incluso de carácter tecnológico y el despliegue de un equipo mejor calificado al momento de movilizar el voto a favor de una candidatura.

Los procesos de selección de candidaturas de los partidos políticos son el primer gran filtro que las mujeres deben superar. Los precandidatos suelen financiarse con recursos propios y no partidarios, siendo que las mujeres suelen no contar con ellos dado el rol que juegan en el núcleo familiar y limitados contactos para generar apoyos. En el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (2014) se evidencia que las mujeres son menos proclives a mencionar un contacto a la hora de acceder a un derecho. La encuesta refiere que las mujeres tienen cuatro puntos más de probabilidad de estar aisladas que los hombres. Esta brecha responde a la confluencia de diversos factores, algunos de ellos de índole cultural, tal y como apuntan Lamas y Azuela (2009:58) “la lógica cultural del género incide de manera radical en detrimento del ejercicio de los derechos político-electorales de muchas mexicanas”.

Colombia, en la Ley de Cuotas 581 del año 2000, reconoció que las mujeres deben ocupar un 30% de los cargos de máximo nivel de decisión y en la Ley 1475 de 2011 la necesidad de dar recursos económicos para favorecer la presencia de mujeres; sin embargo, no se advierten sanciones significativas o pronunciamientos jurisdiccionales que “golpeen” de manera contundente el incumplimiento de los partidos políticos a la norma en este país. En las elecciones de 2014 se puso en marcha por primera vez la Ley del 2011, los presidentes de los partidos argumentaron que no había el número de mujeres suficientes o que no

Politics, and Democracy in Latin America: An Introduction" in Freidenberg, Flavia, Mariana Caminotti, Tomas Dosek y Betilde Munoz-Pogossian. 2016. Women, Politics, and Democracy in Latin America. New York: Palgrave MacMillan. Los autores explican que los techos de cristal son obstáculos que siguen afectando el acceso de las mujeres a la permanencia y ejercicio del poder político.

Los techos de cemento se rompen cuando se superan las limitaciones autoimpuestas sobre la base de creencias y prejuicios sobre sus propias habilidades o potenciales contribuciones a la vida política, decide seguir adelante con una nominación.

Los techos financieros (o de dinero) que son entendidos como aquellos recursos económicos que son necesarios para la planeación e implementación de una campaña política.

querían ponerlas de relleno.⁴ El materia de financiamiento y género, el artículo 17 de la Ley 1475 señala que el 5% del financiamiento total que reciban los partidos o movimientos políticos se distribuirá en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas.

La presencia de recursos económicos es una circunstancia que se reconoce como medida de acción afirmativa e incluso con ello se incentiva el empoderamiento de las mujeres; sin embargo, en Colombia, la entrega de los recursos a los partidos depende del éxito de las mujeres en las elecciones. La experiencia muestra que si existen diferencias significativas e históricas en el apoyo hacia las mujeres (dentro y fuera de los partidos), el desarrollo de capacidades y la generación de escenarios favorables para que las mujeres logren competir en un plano de igualdad, resulta poco alentador que los recursos se condicionen de este modo.

Del financiamiento estatal que es entregado a los partidos y movimientos políticos en Colombia, al menos el 15% debe emplearse para actividades de los centros de pensamiento, cursos de formación política y electoral y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas. La falta de regulación específica de cómo emplear los recursos genera un área de discrecionalidad dentro de cada movimiento y partido que desvanece la posibilidad de que los recursos se empleen eficazmente y se distribuyan de manera equitativa entre las candidaturas. Para cumplir con la rendición de cuentas de los partidos y movimientos presentan dentro de los primeros cuatro meses del año, estos deben presentar la declaración de patrimonio, ingresos y gastos mediante el formato aprobado previamente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los informes de campaña de los partidos se encuentran disponibles en la página del CNE pero no hay acceso público a los informes de las actividades ordinarias, por lo que el uso de recursos en favor de las mujeres queda oculto en el ámbito de la vida interna que no permite analizar si se cumplió con la norma desde un punto de vista cuantitativo o, incluso más a fondo, qué actividades realizaron los sujetos obligados para la inclusión efectiva de mujeres. La carencia de información respecto al cumplimiento de la disposición limita la posibilidad de conocer, tan sólo en un nivel primario, si existe voluntad y compromiso de las élites políticas para la efectiva incorporación y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en las instituciones políticas.

Brasil contempla un Fondo Partidario a favor de los partidos políticos que, de acuerdo a la Ley 9.096 de 1995, se integra por multas y sanciones pecuniarias impuestas en virtud del Código Electoral y las leyes relacionadas. En la normativa se establecen los recursos financieros que se asignan por la ley, donaciones de personas físicas o jurídicas y las asignaciones del presupuesto de la Unión. El artículo 44 de esta Ley dispone que el organismo de dirección nacional de los partidos políticos está obligados destinar un porcentaje de sus recursos para la creación y mantenimiento de programas de promoción y

⁴ Consultable en el sitio de internet http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457094.pdf

difusión de la participación política de la mujer. Este porcentaje no puede ser inferior al 5 % del total de recursos que reciben.

En materia de financiamiento indirecto, Brasil y México, no así Colombia, destinan además tiempo en radio y televisión a los partidos políticos para la oferta de sus plataformas políticas y de campaña. En ese sentido, en Brasil se contempla que de los espacios dados a los partidos políticos se deberá destinar al menos el 10% para la promoción y difusión de la participación política de las mujeres. Contar con acceso a los medios de comunicación masiva para el empoderamiento de la mujeres resulta una herramienta fundamental para hacer política con perspectiva de género, pues aún y cuando las redes sociales se han convertido en espacios relevantes para el acceso a información, reflexión y difusión, no puede soslayarse el papel que siguen jugando la radio y televisión (Llanos 2012).

En los tres países analizados, los candidatos pueden aportar recursos económicos a sus campañas, circunstancia que favorece a los hombres, pues son los que tradicionalmente se han desarrollado profesionalmente y han generado las redes personales que les permiten obtenerlos. La actividad económica y política han sido campos de acción preponderantemente masculinos, por lo que es factible decir que las mujeres, cuentan con un acceso limitado a fondos y relaciones que les permitan contar con capital económico y redes para poder financiar una campaña electoral.

Finalmente, en México se realiza una revisión anual del debido empleo de los recursos para los fines que la norma señala y se imponen sanciones para el caso de encontrar irregularidades. Brasil contempla en la Ley de Partido Político que la parte que no cumpla con las disposiciones relativas a destinar financiamiento en favor de la mujer, en años posteriores, atreguará 2.5 % de sus ingresos de la caja del partido para ese fin.

IV. México: el uso de recursos públicos como mecanismos de acción afirmativa

La participación política de las mujeres en espacios institucionales (puestos de elección popular) ha tenido un avance paulatino. En la Legislatura LXI del Congreso de la Unión, de acuerdo con el resultado del Proceso Electoral Federal 2008-2009, hubo una integración de 28% de mujeres en la Cámara de Diputados (la elección de 2006 integró un 23% en la de Senadores). La actual legislatura LXIII federal tiene una composición de 42.4% de mujeres de las 500 curules que integran la Cámara Baja y de 36.7% correspondientes a la Cámara Alta.⁵

La Reforma Electoral del año 2014 al artículo 41 constitucional introdujo la paridad de género en los cargos de elección popular federales y locales. Este principio fue abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro “PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL”. En ella, la Sala sostiene que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión, asegurar la paridad vertical y desde

⁵ Ver la información en el Instituto Nacional Electoral. Fuente://genero.ife.org.mx/legislativo_sen.html

de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado.⁶

En materia de financiamiento y ante la necesidad de abatir la desigualdad entre hombres y mujeres, desde las estructuras internas de los partidos políticos, y reconociendo el papel tan importante que éstas juegan *en y para* la democracia, es que en el año 2008 dentro del paquete de acciones que se aprobaron con motivo de la Reforma Electoral se consideró oportuno validar una medida en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que contribuyera a visibilizar a las mujeres dentro de sus partidos políticos.

En 2008 se aprobó una reforma, suscrita en la Cámara de Diputados por 55 legisladoras y 6 legisladores de distintas bancadas a través de una acción afirmativa que involucró directamente a los partidos políticos, pues se determinó que debían destinar recursos públicos para fomentar y fortalecer acciones internas en los partidos políticos que sirvieran para acortar la distancia existente entre los hombres y mujeres: la capacitación como componente de empoderamiento.⁷ Esta acción afirmativa, entendida como una medida temporal para acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer,⁸ obligó a los partidos políticos a destinar inicialmente el 2% del financiamiento público que reciben para actividades específicas para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer.

En otras palabras, a través de los recursos públicos, se buscó que los partidos políticos acompañaran las normas con las que cuentan a nivel interno de acciones encaminadas a crear, desarrollar e incentivar buenas practicas que ayuden a las mujeres a lograr una participación incluyente en todas y cada una de la áreas de oportunidad que existen internamente: participación en políticas públicas, agenda social, candidaturas, áreas de dirección y de toma de decisiones, debates, entre otras.

La disposición fue recogida en el artículo 78, inciso a), fracción V del Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales que prevé que para la “capacitación, promoción, desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el 2% por ciento del financiamiento público ordinario”. Con este paso legal una considerable parte de los recursos públicos con los que cuentan⁹ los institutos políticos

⁶ Consultable en el Link <http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=7/2015>

⁷ “Las diputadas y senadoras estaban conscientes de la barrera ‘no hay mujeres’ por ello se necesitaba propiciar dentro de los partidos políticos el recursos económico, siempre inexistente, para su capacitación, crear espacios para que las militantes pudieran no sólo acceder a las herramientas necesarias del ejercicio político, sino para compartir experiencias y planear estrategias de consolidación en un espacio tan masculino como hasta ahora ha sido la política” (Cárdenas Morales 2011: 23).

⁸ El Comité contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su “Recomendación General 25”, considera la aplicación de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación, sino como parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

⁹ En el primer ejercicio que se aplicó la norma, se afectó parte del financiamiento público 2008 por \$49, 513,242 millones de pesos distribuidos en 8 partidos políticos.

ya no podía ejercerse libremente para las encomiendas constitucionales, operación y, en general, administración de los mismos.

Tabla No. 9
Recursos asignados a los partidos políticos para el liderazgo de las mujeres (2009-2012)

PARTIDO	2009		2010		2011		2012	
	EROGADO	2% QUE DEBIÓ DESTINAR	EROGADO	2% QUE DEBIÓ DESTINAR	EROGADO	2% QUE DEBIÓ DESTINAR	EROGADO	2% QUE DEBIÓ DESTINAR
PAN	\$19,439,987.	\$15,187,262	\$14,944,869	\$14,711,118	\$16,209,091	\$15,769,161	\$17,705,308	\$16,991,366
PRI	\$13,477,361.	\$10,624,717	\$15,904,313	\$18,606,721	\$25,116,677	\$19,944,941	\$44,604,325	\$21,490,794
PRD	\$1,397,719.	\$9,129,411	\$8,110,492	\$7,818,009	\$10,007,443	\$8,380,291	\$10,002,128	\$9,029,814
PT	\$4,854,478.0	\$4,330,277	\$4,873,235	\$4,089,972	\$6,069,575	\$4,384,129	\$5,149,320	\$4,723,925
PVEM	\$7,018,935.1	\$4,572,747	\$9,694,047	\$5,420,151	\$6,759,636	\$5,809,975	\$6,273,193	\$6,260,284
NUAL	\$4,715,425.9	\$3,837,272	\$5,193,204	\$3,929,080	\$15,305,040	\$4,112,554	\$4,366,080	\$4,603,826
COYERGENCIA/ Ahora MC	\$5,410,612.5	\$4,094,254	\$3,811,843	\$3,569,176	\$6,656,110	\$3,825,876	\$4,200,000	\$4,122,405

Fuente: página del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

En 2014, la Reforma Constitucional en materia político electoral creó el Instituto Nacional Electoral, le dotó de 74 nuevas competencias y homologó las disposiciones en materia de financiamiento en todo el país. La fórmula constitucional de cálculo debe observarse por cada una de las entidades federativas y las disposiciones en materia de fiscalización son ejercidas únicamente por la autoridad nacional. De este modo, la regulación contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se reflejó y dos nuevas leyes: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos, que en el artículo 3 señala que los partidos políticos deben buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos y en la postulación de candidatos.¹⁰

La Ley General de Partidos Políticos regula lo concerniente al financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos; sin embargo, sólo hace referencia a la obligación de destinar el 3% de los recursos para el empoderamiento de las mujeres, siendo que la regulación específica se encuentra en el Reglamento en materia de Fiscalización, norma que reconoce como mecanismos para el ejercicio del gasto los siguientes: a) Tareas editoriales, b) Investigación y c) Capacitación.

¹⁰ Ese mismo artículo reconoce que corresponde a cada partido determinar criterios objetivos que garanticen la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, así como la prohibición expresa de no destinar exclusivamente a alguno de los géneros a los distritos perdedores.

La autoridad electoral y los partidos políticos con el objeto de dar claridad o brújula sobre en qué o cómo debían gastarse los recursos para y en favor de las mujeres consideraron suficiente trasladar las actividades ya contempladas para las tareas específicas en la ley y relacionarlas al tema de mujeres y su participación política, sin mayor contenido o beneficio real para el incremento de su participación en la política.

En 2010 se realizó el primer ejercicio de aplicación de la norma y se revisaron por la autoridad electoral los gastos correspondientes al informe anual de ingresos y gastos de 2009. La revisión evidenció que los partidos políticos realizaron actividades que propiamente no contribuían al posicionamiento y visibilidad de la mujer. En algunos casos, reportaron conceptos como enseres domésticos, estudios clínicos, pago de nómina, artículos utilitarios, pago de prestaciones de seguridad social, bajo el argumento de que eran gastos relacionados con y para mujeres y, por lo tanto, debían ser considerados para el debido cumplimiento de la norma.

En ese año, el Partido de la Revolución Democrática reportó en su informe anual de gastos relativos al pago de nómina, reconocimientos por actividades políticas, servicios, viáticos, sueldos de dirigentes, papelería, gasolina. De acuerdo con el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), esos gastos no beneficiaban directamente actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Debido a ello, el órgano máximo de dirección del Instituto sancionó el 28 de septiembre de 2010 al partido con 6.9 millones de pesos.¹¹

El Partido de la Revolución Democrática inconforme con la resolución del Consejo General impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Éste órgano resolvió lo siguiente:¹²

- a. Los gastos operativos, servicios personales y generales de las Secretarías de la Mujer de los partidos políticos nacionales u órganos equivalentes únicamente serían válidos cuando se relacionen de manera directa y exclusiva con la realización del evento o la organización de la actividad con la que dichos institutos políticos den cumplimiento a la obligación.
- b. Se debe demostrar documentalmente que el dinero fue utilizado para la realización de actividades en virtud de las cuales de manera exclusiva o, por lo menos principalmente, se promoció, capacita o desarrolla el liderazgo político de las mujeres, como pueden ser cursos, conferencias, congresos y cualquier otro tipo de actividad que cumpla con la finalidad establecida por la ley.
- c. Las medidas deben aplicarse al mayor número de personas posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) y con programas dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) a efecto de que el partido cumpla con la misma de

¹¹ De \$9,129,411 pesos sólo destinó \$1,397,719.

¹² Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-175/2010. Consultable en la página <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00175-2010.htm>

la manera más amplia posible y con la posibilidad de evaluar los correspondientes resultados.

d. La inclusión de sueldos y otro tipo de gastos ordinarios únicamente es válido cuando tales gastos se relacionan de manera directa y exclusiva con la realización del evento o la organización de la actividad con la que el partido pretende dar cumplimiento a la obligación legal de mérito, puesto que de lo contrario se desvirtuaría la finalidad de la norma consistente en cumplir determinadas actividades que promuevan, desarrollen o capaciten a las mujeres en el liderazgo político.¹³

Estas definiciones jurisdiccionales contribuyeron a aclarar algunos de los conceptos en los que los partidos políticos pueden invertir los recursos, pero no solucionaron el dilema de qué actividades sí fortalecen la participación de las mujeres. Para 2011, la intervención de un grupo de destacadas mujeres mexicanas¹⁴ (integrantes del Grupo de Mujeres en Plural) nuevamente motivó una reacción por parte de la autoridad electoral al poner sobre la mesa dudas respecto a cómo estaban ejerciendo los recursos los partidos políticos, a qué grupos de la sociedad se dirigían, qué entidades o regiones del país eran las beneficiadas y por qué, qué criterios de distinción se realizaban para determinar si un gasto correspondía o no al tema de género, entre otros.

El Consejo General del IFE decidió aprobar en julio de 2011 disposiciones reglamentarias que buscaron dar claridad respecto a qué significaba “capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político”. En el acuerdo (identificado con la nomenclatura CG201/2011) se motivó que la autoridad electoral “considera necesario regular que los partidos políticos deberán programar el gasto, estableciendo objetivos, metas e indicadores con el fin de medir la eficacia y la eficiencia del destino de los recursos para el desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres”.

Los partidos políticos consideraron que para cumplir con la norma, debían diseñar sus estrategias internas, sin que ello significara que en todos los casos lo lograron, pues eventualmente la Unidad de Fiscalización¹⁵ ha tenido que intervenir para corregir el rumbo. No obstante, lo positivo es que se involucró a los partidos políticos en una lógica de rendición de cuentas que los obliga a informar, programar y planear el gasto de los recursos

¹³ Estas consideraciones del órgano jurisdiccional se incluyeron en el Artículo 304 del Reglamento de Fiscalización, en el que expresamente se dice: “1. No se considerarán como gastos programados:

a) Actividades ordinarias permanentes de los partidos, incluidas las referentes a los gastos operativos y servicios personales y generales de las Secretarías de la Mujer de los partidos u órganos equivalentes, cuando no se relacionen de manera directa y exclusiva con las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres”

¹⁴ María Elena Chapa Hernández, María de las Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara.

¹⁵ Órgano técnico que forma parte de la estructura del Instituto Nacional Electoral con autonomía técnica encargado de la revisión de los recursos que ejercen los partidos políticos, agrupaciones políticas, coaliciones, candidatos de partido e independientes.

públicos dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del financiamiento público (esto aprobación depende de cada entidad federativa).

Los programas que presentan deben contemplar: a. acciones afirmativas, b. empoderamiento de las mujeres, c. igualdad sustantiva y, d. liderazgo político y perspectiva de género. La mecánica de incluir el gasto para el liderazgo de las mujeres basado en una presupuestación permitió que los partidos políticos no se enfocaran en lograr a toda costa invertir los recursos, sino que, a través de las Secretarías para las Mujeres, pensarán en proyectos debidamente planificados que no dependieran del costo, sino de la meta que pretendían alcanzar.

El programa conocido como PAT es un sistema de evaluación del desempeño del gasto programado que comprende la revisión de los proyectos, es decir la evidencia del grado de cumplimiento de objetivos y metas con base en los indicadores registrados. Su objetivo es “establecer los instrumentos metodológicos a los que deben sujetarse los partidos políticos nacionales, para el registro de los gastos en la aplicación de recursos destinados a los proyectos destinados para este financiamiento”, en términos de lo dispuesto por los Lineamientos que emite la Unidad Técnica respecto al Plan Anual de Trabajo.

Este tipo de medidas es importante acompañarlas de un conjunto de acciones paralelas por parte del Estado, que permitan que de manera coordinada y alienada se trabaje desde diversos niveles y sectores de la sociedad para el involucramiento e integración de la mujer en todos los ámbitos. Es decir, no son los esfuerzos aislados lo que van a permitir el desarrollo pleno de las mujeres, pues los rezagos y barreras existentes son de tal magnitud que deben ser combatidos desde todos los ámbitos posibles. El visibilizar a las mujeres en política significa que de manera previa y/o paralela las incluí en la vida cotidiana, en aspectos mínimos como el reconocimiento de sus capacidades, el derecho a recibir educación, salud y en general, a todo aquello a lo que aspiramos en un Estado de bienestar.

Si bien se ha avanzado en el tema, pues la autoridad electoral y los partidos políticos se han esforzado por resultados favorables en el ejercicio del presupuesto para el liderazgo de la mujer, falta dar el último paso: desarrollar procesos de evaluación efectivos que permitan constatar en qué medida los partidos políticos están cumpliendo con el ejercicio del recurso y su aplicación, sino también si las medidas que toman respecto al tema afectan o benefician en algo a las mujeres dentro y fuera del partido político.

Después de seis años de vigencia de la norma del 3% y luego de revisar los informes rendidos por los partidos políticos y dictámenes de la autoridad electoral, la conclusión es que se ha avanzado en el reporte y ejercicio del gasto respecto de actividades que busquen el empoderamiento de las mujeres. Los partidos políticos han adoptado buenas prácticas en el ejercicio del recurso, generalmente motivadas por las mujeres que militan en ellos. Asimismo, la autoridad electoral incentiva la rendición de cuentas al, por ejemplo, verificar los eventos realizados por los partidos políticos a través de la presencia de auditores (quienes de manera previa reciben asesorías con perspectiva de género). Los auditores no se limitan a realizar una valoración cuantitativa de los recursos empleados por el partido, sino a calificar de manera objetiva la pertinencia del evento para el fin, el grado de cumplimiento cuantitativo de metas e indicadores y el seguimiento a la planeación.

Con la finalidad de evidenciar los avances en materia de planeación y presupuesto del 3%, la Unidad Técnica de Fiscalización organizó junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Autónoma de México, un concurso para reconocer el mejor planteamiento realizado con perspectiva de género en el PAT 2012. La evaluación no otorgó un reconocimiento a un primer lugar, pues el jurado determinó que no se presentó proyecto que cumpliera con los criterios que previamente fueron aprobados para evaluarlos.¹⁶ No obstante, se reconoció cuatro proyectos presentados por los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional.

Tabla No. 3
Reconocimiento PAT 2012

Partido Político	Nombre del proyecto	Beneficios
PRI (segundo lugar)	Diseño y elaboración de contenidos y materiales del sistema de educación para la implementación del PAT dirigido a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Así como la realización de un plan editorial.	Modelo educativo desde la perspectiva de género, para mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes que fomenten los liderazgos políticos y empoderamiento de las mujeres, a fin de lograr la inclusión en la toma de decisiones en condiciones de igualdad con los hombres. Plan editorial para reforzar aquellas áreas del programa de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Facilitó el estudio a través de nuevas tecnologías y educación a distancia
PRD (tercer lugar)	Formación política y conciencia de género (videotecas)	Fomentó la sensibilización sobre la problemática específica de las mujeres desde la perspectiva de género, y sobre temas de interés nacional. Se buscó llevar a las y los 30 expositores participantes en esta videoteca, hasta regiones de difícil acceso. Se facilitó la comprensión y consulta permanente, de una forma dinámica e interactiva.
PT (tercer lugar)	Liderazgo, igualdad de género y derechos humanos en México: por la participación política de las mujeres	Se desarrollaron competencias de liderazgo y participación política femenina en los estados de Querétaro, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas. Se buscó incrementar el número de mujeres en espacios de toma de decisión en el ámbito local.

¹⁶ Estos criterios obedecieron al cumplimiento del objetivo; la calidad de la propuesta, la eficacia del programa para lograr el empoderamiento de las mujeres, el impacto en el mayor número de mujeres posible y los productos que como resultado de su implementación se obtuvieran.

Partido Político	Nombre del proyecto	Beneficios
PAN (cuarto lugar)	FORO: Objetivo de desarrollo del Milenio (Programa anual para la capacitación y formación del liderazgo político de las mujeres)	Avances que México ha tenido desde la celebración de la Cumbre Mundial de la ONU en el año 2000 y los retos que debemos de afrontar como país y como actores en la sociedad para alcanzar los desafíos en el 2015. El foro sirvió para marca un eje a seguir a las 32 Secretarías Estatales de Promoción Política de la Mujer que asistieron para la elaboración de planes y acciones que contribuyan a la construcción de una sociedad más igualitaria, incluyente, respetuosa y que impulse la igualdad entre los géneros de manera particular en sus Estados y a través de su propia actuación como secretarías del Acción Nacional.

Fuente: Disponible en la página de internet: http://genero.ife.org.mx/docs/resultados_PAT-2012.pdf

Ahora bien, respecto a prácticas que aún subsisten, el 10 de marzo de 2014, el Consejo General del entonces IFE impuso una sanción al Partido Acción Nacional, por no cumplir con el porcentaje destinado a ésta actividad específica, pues con motivo de la revisión del Informe Anual 2012 se generó la duda de si los recursos que aplicó para el liderazgo de las mujeres cumplían con los criterios adoptados en el Reglamento de Fiscalización.¹⁷ Concretamente, se cuestionó al partido político las actividades que desarrolla la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, pues en los informes que rindió a la autoridad electoral omitió la descripción pormenorizada de las actividades en las que participa la citada secretaría, dado que una primera revisión se advertía que no existía un vínculo directo con el Programa Anual de Trabajo presentado por el citado partido.

El partido en su defensa argumentó básicamente que debía de tomarse en cuenta dentro del gasto las actividades realizadas por el personal de la Secretaría de Promoción, correspondientes a la asistencia a cursos impartidos por al Instituto Federal Electoral, así como la reproducción de material denominado “Video Promocional de la Equidad de Género”. El Consejo General determinó que “las actividades enunciadas por el partido político si bien refieren a cursos, entregas de reconocimientos, reuniones y concursos en los que participó personal de la Secretaría de Promoción, estos no implicaron un gasto en beneficio del empoderamiento de las mujeres, sino insumos para el personal con la finalidad de brindarles herramientas replicables al interior del partido.”¹⁸

Adicionalmente, en la resolución se razonó que la Secretaría no sólo posee funciones relacionadas con las actividades de capacitación, promoción y desarrollo político de la mujer, sino que además llevaba a cabo actividades relacionadas con el cumplimiento de otras obligaciones formales que el partido tiene en materia de fiscalización, o bien de representación ante el IFE. Respecto al video promocional se argumentó que la

¹⁷ Resolución CG242/2013, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce. Link:

<http://ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.110045b65b20f23517bed910d08600a0/?vgnnextoid=d33eb37727e1a310VgnVCM1000000c68000aRCRD>

¹⁸ Acuerdo del Consejo General CG111/2014 respecto al procedimiento oficioso identificado como P-UFRPP 46/13. Link http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2014/Marzo/CGext201403-10/CGex201403-10_rp_3_3.pdf

reproducción del mismo no podía considerarse como un gasto adicional, pues los recursos que se erogan como nómina a las personas que colaboran en su retransmisión no evidenciaban empoderamiento alguno en favor de las mujeres.

En los últimos años, la fiscalización de los recursos en este rubro se ha perfeccionado a través de medidas correctivas que incentiven que los partidos políticos destinen la totalidad de los recursos que les son entregados, imponiendo sanciones por no emplearlos en actividades que sirvan para empoderar a las mujeres e, incluso, la devolución del dinero que no gastaron en ello.

V. Conclusiones

Las acciones afirmativas emprendidas por Brasil, Colombia y México deben acompañarse por reformas legislativas que motiven un cambio radical en la manera en cómo se integran pre-candidaturas y candidaturas en los partidos políticos, pues sin dejar de lado la facultad de autodeterminación que tienen los partidos políticos. La participación política de hombres y mujeres en igualdad de circunstancias debe contar con mecanismos que les permitan acceder efectiva la participación política en los espacios internos y contribuir a pasar la barrera de aspirantes a candidatas y de ahí a electas.

La experiencia comparada llama la atención sobre la necesidad de la elaboración de un Manual o Protocolo de Buenas Prácticas que contribuya a identificar y guiar de qué manera pueden emplearse los recursos para que logren que tanto hombres y mujeres reconozcan la existencia de brechas y la necesidad de erradicarlas. En ese sentido, se deben diversificar esfuerzos y traspasar la barrera de lo nacional y lo regional, orientando buenas prácticas que se repliquen vertical y horizontalmente en los partidos políticos. La suma de esfuerzos internos que integren a todos los sectores que conforman cada partido contribuye a visibilizar malas prácticas y potenciar las buenas.

La evidencia muestra la necesidad de identificar las necesidades de cada partido político a nivel regional para emplear los recursos públicos de manera asertiva, pues el nivel de desarrollo y empoderamiento de las mujeres evidencia distintos niveles dependiendo de la zona, sector y objetivo que se pretenda alcanzar. En ese sentido, un diagnóstico sobre las necesidades contribuirá a emplear mejor los recursos públicos que se entregan a los partidos. La evaluación muestra que los recursos para el empoderamiento no tienen que provenir necesaria y exclusivamente del recurso etiquetado para el empoderamiento de las mujeres. En ese sentido, sería un buen gesto de los partidos que los recursos se complementaran con otras de sus fuentes de financiamiento.

Trascender de la apariencia del buen hacer a un hacer efectivo es un trabajo primario en las estructuras partidistas, con la finalidad de que las mujeres contiendan en condiciones de igualdad y no sólo en aquellos distritos, municipios, estados en los que se considere la batalla perdida desde un inicio. El esfuerzo es significativo en materia de financiamiento para fortalecer la presencia de mujeres en las contiendas electorales, dado que se ha logrado permear en los partidos políticos el reconocimiento y la necesidad de medidas efectivas y

eficaces para el empoderamiento de la mujer; sin embargo, es necesario avanzar en el tema a una supervisión efectiva de cómo se gastan los recursos.

La ambigüedad de las normas, al menos en el caso mexicano, no ha permitido obtener resultados visibles o de gran calado, pues el modelo que se utilizó para invertir los recursos fue el mismo que se utilizaba para las actividades específicas que desarrollan de manera cotidiana los partidos políticos para alcanzar uno de sus fines primarios: promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y la difusión de la cultura política.

El incremento del porcentaje de recursos que actualmente se asignan en los tres países analizados para este fin no es la única medida para lograr el empoderamiento de la mujer. Mientras no existan acciones internas en los partidos políticos que impidan la simulación y generen competencia en igualdad de circunstancias no lograremos disminuir y eliminar la violencia institucional y política que se ejerce en contra de las mujeres.

VI. Bibliografía

Ansolabehere Sesti, Karina, coordinadora. 2009. *Género y Derechos Políticos, La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de las mujeres en México*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cárdenas Morales, Natividad. 2011. *El Financiamiento Público de los partidos políticos nacionales para el desarrollo político del liderazgo de la mujeres*, Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México.

Córdova Vianello, Lorenzo y Murayama Rendón, Ciro. 2006. *Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox*, México, Cal y Arena.

Dworkin, Ronald. 1993. *Los derechos en serio*, Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo, Planeta Agostini, volumen 40.

Equidad de Género y Derecho Electoral en México 2009. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México.

Ferreira Rubio, Delia María. 2015. *Financiación Política y Género en Iberoamérica*, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Ferreira Rubio, Delia María. 2013. *Financiamiento Político, Género y Equidad en la Competencia Electoral*, Bitácora de Organizaciones Políticas, Separata de la Revista Andamios, número 7 y 8, Octubre 2012-Abril 2013, páginas 78-86.

Freidenberg, Flavia y Estrada Erika. 2014. “Paridad+democracia interna=+democracia”. Revista Voz y Voto, número 260, Octubre, páginas 35-38.

Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México.

Llanos, Beatriz (2014), “Ojos que (aún) no ven. Nuevo reporte de 8 países: género, campañas electorales y medios en América Latina,” in Nélida Archenti y María Inés Tula (coords), *La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas*, Buenos Aires: Eudeba.

Llanos, Beatriz and Vivian Roza (forthcoming), “Más poder, menos mujeres: una aproximación a las desigualdades de género en las máximas instancias ejecutivas de los partidos latinoamericanos,” in Flavia Freidenberg, Mariana Caminotti, Tomáš Došek, and Betilde Muñoz-Pogossian (eds), *Mujeres en la política en América Latina: experiencias nacionales y subnacionales*, Ciudad de México: Tirant lo Blanch and Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Munoz-Pogossian, Betilde, Flavia Freidenberg, Mariana Caminotti y Tomas Dosek. 2016 (forthcoming). "Women, Politics, and Democracy in Latin America: An Introduction" in Freidenberg, Flavia, Mariana Caminotti, Tomas Dosek y Betilde Munoz-Pogossian. 2016. *Women, Politics, and Democracy in Latin America*. New York: Palgrave McMillan

ONU Mujeres. 2013. *Participación Política de las Mujeres en México*. A 60 años del reconocimiento al derecho del voto femenino. México, ONU.

Pomares, Julia (2014), “Un ‘techo de billetes’ entre las mujeres y la política,” *La Nación*, <<http://www.lanacion.com.ar/1698865-un-techo-de-billetes-entre-lasmujeres-y-la-politica>> (accessed 15 July 2015).

Zovatto, Daniel y Casas-Zamora, Kevin. 2015. *El costo de la democracia. Ensayo sobre el financiamiento político en América Latina*, México: IDEA Internacional e Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Ensayos Jurídicos, número 273.